

EDITORIALES

Sostenibilidad local

La intervención de casi todos los municipios de menos de 5.000 habitantes plantea más dilemas que los financieros

El anteproyecto de racionalización y sostenibilidad de las entidades locales contempla la eventualidad de que las competencias propias de los municipios de menos de 5.000 habitantes sean intervenidas por las diputaciones -y en su caso por los gobiernos de las autonomías uniprovinciales- cuando su gestión resulte ineficiente al superar el 'coste estándar' de los servicios. El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas estima que tal circunstancia afectará nada menos que al 92,1% de ayuntamientos que representan más de tres cuartas partes de los municipios españoles. La norma de bases en preparación contempla la posibilidad de que las entidades locales intervenidas puedan recuperar sus competencias esenciales -alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua potable, accesos y pavimentación- una vez demuestren su viabilidad financiera. Pero la previsión del Gobierno en cuanto al alcance de la intervención no solo cuestiona la posibilidad de tal recuperación, sino que anuncia la anulación de facto de la inmensa mayoría de esas entidades locales. Lo que en la literalidad normativa del anteproyecto aparece poco menos que como una hipótesis excepcional se convierte, de hecho, en regla general. De ahí que resulte importante que la discusión gubernamental del propio anteproyecto y su posterior tramitación parlamentaria traten de ampliar las posibilidades para que, dentro de los requisitos de sostenibilidad que en última instancia emanan del nuevo artículo 135 de la Constitución, la intervención pueda limitarse y, sobre todo, puedan arbitrarse salidas solventes mediante la gestión mancomunada de los servicios locales o mediante la fusión de municipios. La asunción de las competencias locales reseñadas por parte de las diputaciones o de gobiernos uniprovinciales no garantiza el inmediato abaratamiento de los servicios ofertados hasta ahora en condiciones de mínima calidad. La indiscutible racionalidad económica de la previsión legal plantea dos problemas que las instituciones nacionales, autonómicas y provinciales en ningún caso pueden orillar. Por una parte, el riesgo de un nuevo desdoblamiento de la España más rural. Por la otra, el estrecho cauce que se le brinda a la participación política plural y pluralista en esa parte intervenida de la España municipal.

La troika en España

Los 'hombres de negro' de la temida troika, inspectores de la Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI), visitan desde hoy España por tercera vez desde la firma en julio pasado del Memorandum de Entendimiento del rescate financiero para comprobar si se están cumpliendo los requisitos acordados al habilitarse la ayuda de 100.000 millones de euros, de los que se han utilizado unos 44.000. El portavoz comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios, Simon O'Connor, acaba de manifestar que el rescate está «procediendo según lo previsto, con la implementación de los planes de reestructuración de los bancos que recibieron ayuda estatal en marcha». El único asunto polémico que sin duda tratarán las autoridades españolas con los inspectores es la reciente entrada en vigor de la nueva normativa del Banco de España sobre las refinanciaciones de los préstamos de la banca y el impacto de la que podría ser una nueva ronda de provisiones de las entidades. En cualquier caso, el problema parece estar bajo control y no se esperan de esta visita sorpresas desagradables.

Lentejas

Al final, todo ha resultado un nuevo desprecio del Gobierno regional por cualquier apuesta de los agentes sociales

ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ
SECRETARIO GENERAL DE UGT
DE LA REGIÓN DE MURCIA



DANIEL BUENO VALENCIA
SECRETARIO GENERAL DE CCOO
DE LA REGIÓN DE MURCIA

El pasado 15 de mayo fuimos convocados, como sindicatos más representativos en la Región de Murcia, a una reunión convocada por el vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal. En ella se nos vino a presentar el enésimo Plan Económico Financiero de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de la Región de Murcia, un plan que, fundamentalmente, orbita en torno a una general subida de impuestos, más despidos en el sector público, nuevas rebajas salariales y nuevas medidas de recorte y mercantilización de los servicios públicos, sin que en dicho plan se advierta una sola medida que incremente la protección social o se dirija a estimular la actividad económica, aunque ésas sean, precisamente, las urgencias más perentorias de una Región que se desangra por el paro y la parálisis de su economía.

Después de andar unos meses mareando la perdiz, nos confirmaban en esa reunión, con algún que otro eufemismo, eso sí, lo que todos ya sabemos: los anteriores planes de reequilibrio han resultado ser un absoluto fracaso, sirviendo para todo menos para reequilibrar las cuentas públicas y corregir un déficit que, ejercicio tras ejercicio, ha rebasado el techo permitido. Así que, en nombre de la sacrosanta «austeridad», se nos dice que es «necesario» volver a imponer sacrificios, por supuesto, a los de siempre: a los únicos que, tras cinco años de crisis, han pagado con sus puestos de trabajo, sus salarios, sus prestaciones y sus derechos sociales los despilfarros y la incompetencia de quienes nos gobiernan.

Pero, hete aquí, que hasta el pasado jueves, el Gobierno regional seguía enrocado en negar la mayor, rebuscando algún efecto estadístico al que llamar «drote verde», y pidiéndonos «un poquito de optimismo» por boca del propio presidente Valcárcel. Así que el punto álgido del cinismo gubernamental llega cuando, tras pedir los sindicatos que se escuchasen nuestras alternativas antes de adoptar nuevos recortes, el Consejero nos reprende por no conocer el «procedimiento»: su maravilloso plan primero debía someterse al Consejo de Gobierno y después se nos presentaría a nosotros para formular alegaciones y propuestas. Pero no

hay rastro del plan en las referencias del Consejo de Gobierno de los días posteriores, y lo que se produce después es lo que el Gobierno entiende por «diálogo» y «participación»: se convoca primero a unos sindicatos, luego a otros, por separado a la patronal, a unos se les cantan de viva voz las medidas, a otros se les dan por escrito, y se nos da el irrisorio plazo de apenas unas cuantas horas para presentar propuestas y... ¡'voilà!', ya se ha terminado el proceso de «negociación».

Al final, todo ha resultado un nuevo desprecio del Gobierno por cualquier propuesta de los agentes sociales, ha ridiculizado el concepto de diálogo social con la pantomima de los últimos días y nos ha venido a decir que este disparate de plan son «lentejas».

Pero que no piense ni por un instante este Gobierno que tragaremos con sus lentejas, porque no son los trabajadores del sector público, ni sus puestos de trabajo, ni sus salarios, ni los usuarios y beneficiarios de los servicios públicos una caja de caudales a la que el Gobierno puede recurrir cuando le venga en gana para sufragar los gastos de su propia incompetencia.

Existen alternativas fiscales y de contención del gasto, que no suponen ni un perjuicio para las rentas más humildes ni un perjuicio para la calidad asistencial de nuestros servicios públicos, ni para las condiciones de trabajo de los profesionales que los sostienen; existen y se las hemos puesto encima de la mesa tantas veces como ellos las han ignorado y guardado en un cajón. En los próximos días y sin que haya habido ningún proceso serio de diálogo con los agentes sociales, el plan se presentará a la Asamblea y previsiblemente será aprobado gracias a la mayoría absoluta con la que el Partido Popular cuenta en el Parlamento autonómico. Así que, ya que no se nos ha dado opción de hacerlo en una verdadera mesa de trabajo y diálogo, a la altura de lo que nos estamos jugando, defenderemos nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nuestras escuelas, nuestra Universidad, a nuestros dependientes y la dignidad de los profesionales que trabajan en ellos, con todas las movilizaciones que sean necesarias, hasta que el Gobierno rectifique unas políticas que, lejos de construir un futuro sostenible para esta Región, lo están destruyendo.

LA VERDAD

DIARIO DE LA MAÑANA FUNDADO EN 1903
EDITA: LA VERDAD MULTIMEDIA S.A. DEPOSITO LEGAL MU 3-1958

Director Alberto Aguirre de Cárcer

Subdirector
Joaquín García Cruz
Jefe de edición
Pachi Larrosa Sancho
Jefes de área
LOCAL: Manuel Buitrago Bernal
y Ricardo Fernández Jiménez
CULTURAS: Miguel Ángel Ruiz Parra
y Paz Gómez Martín
DEPORTES: Francisco Lastra Lorca
FIN DE SEMANA: Julián Mollejo
Jefe de arte
Iker Barinagarrementia
Jefe de fotografía
Enrique Martínez Bueso

Editor jefe de Verdad.es
Victor Rodríguez Ríos
Responsable de contenidos
audiovisuales
Noelia Arroyo Hernández
Diseñados
Alicante
Pedro López García
Cartagena
Gregorio Mármod
Lorca
Pilar Wals Rúa

Director General
Antonio González García

Director de marketing
José Manuel Jiménez Romera
Directora control de gestión
Carmen Valentin Asta
Directora comercial
Inmaculada Fernández
Director de difusión
Ricardo Villar Muñoz
Publicidad CMLewante
MURCIA 968 27 23 19
ALICANTE 965 92 22 82

LV CONFIDENCIAL

Politólogos y sociólogos pondrán a prueba en las próximas semanas la transparencia de las administraciones autonómica y municipal en la Región con llamadas telefónicas en las que ocultarán su condición profesional y hasta sus verdaderas intenciones. Tan convencido está el decano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología, Javier Sierra, de la necesidad de que los funcionarios faciliten cualquier información de interés gene-

ral que puedan demandarles los ciudadanos, que la directiva que preside ha decidido conocer de primera mano hasta qué punto las administraciones se muestran opacas en Murcia, como se denuncia en los estudios que Transparencia Internacional divulga periódicamente. Al recurrir a esta forma de obtener la información a través de su 'trabajo de campo', los politólogos podrán sacar sus propias conclusiones, sin que éstas se vean mediatizadas o bajo sospecha por las respuestas que los gobernantes facilitan cuando se les pasa un cuestionario al efecto.